

MAYO 9 DE 1932

15.ª REUNION — 3.ª SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES JUAN F. CAFFERATA, HECTOR S. LOPEZ
Y AUGUSTO BUNGE

MINISTRO PRESENTE: de obras públicas, doctor Manuel R. Alvarado; DIPUTADOS PRESENTES: Abalos Próspero, Acosta Abel, Agüero Santos, Ahumada Luis Alberto, Amodeo Aurelio F., Andrés Fernando de, Antelo Mario, Aráoz Ernesto M., Aráoz José Ignacio, Argonz Joaquín, Bermúdez Manuel A., Besasso Domingo, Biancifiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bordabehere Enzo, Brinco Miguel, Bruchon Eduardo, Buita Demetrio, Bunge Augusto, Bastillo José M., Buyán Marcelino, Cafferata Juan F., Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carreras José, Carus Agustín J., Castellanos José D., Castiglioni Eduardo, Castiglioni Alejandro, Castro Felipe, Colombres Carlos G., Cornejo Arias Victor, Corominas Segura Rodolfo, Coronel Carlos, Cortés Artaga Alberto, Costa Méndez Nicanor, Costanti Gerardo, Courat Carlos D., Da Rocha Arturo, Dávila Miguel V., Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreyra Antenor R., Fresco Manuel A. (h.), Ganza Marcelino, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Giusti Roberto F., Godoy Raúl, Gómez Hernán F., González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Maseda Manuel, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Gugliamelli Aquiles M., Herráiz Pascual, Inda Rufino, Iribarne Alberto, Lamesa Juan B., 1.ª Vicente Solano, López Héctor S., Loredó José, Loyarte Ramón G., Luján Abdón F., Maglione Francisco I., Magris Amleto, Manacorda Carlos, Martella Julio O., Martínez Erasmo, Martínez José, Teriberto, Mayo Ramón, Messone Ricardo N., Moreira Alejandro E., Moret Carlos (h.), Mosses Iturraspe Mario, Mouchet Enrique, Navello Miguel V., Nigro Juan, Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Ortiz Basualdo Samuel, Palacín José, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palisa Mujica Arturo, Palmeiro José, Parodi Misael J., Pascarelli Miguel, Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pietranera Bruno J., Pinedo Federico, Pomponio Vicente E., Pueyrredón Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Repetto Nicolás, Rojas Marcos E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Guinazú Jacinto, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schou Lastra Dionisio, Sierra Bernardo, Simón Padrós Juan, Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Tourrés León P., Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Viechi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Vionnet Rodolfo L., Zalazar Altamira Benjamín, Zarda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Aguirrezabala Miguel A., Albarracín Belisario, Molina Serapio, Parera Gregorio, Rodríguez Pinto Domingo, Saggese Angel, Sellarés Arvelino; AUSENTES, CON AVISO: Amadeo y Videla Daniel, Becerra Bernardo, Frías Silva Raúl, Lazo Plácido C., Pereira Clodomiro, Pintos Angel, Zaccagnini Antonio; AUSENTES, SIN AVISO: Alonso Alfredo J., Becerra Eugenio A. (h.), Bosano Ansaldo Daniel, Calderón Osvaldo M., Contte José A., Duhan Luis, Garayalde José María, González Valentín, Harispe Albino H., Herrera Bruno J., Mattos Luis María, Morrogh Bernard Juan F., Mousca Eduardo, Moyano Rodolfo, Palacio Benjamín, Pressacco Juan P., Vignart Uberto F., Zarazaga Marcial J.

SUMARIO

- 1.—Acta.
- 2.—Homenaje a la memoria del ex presidente de Francia, M. Paul Doumer.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre amnistía a los ciudadanos que han incurrido en delitos políticos o militares conexos con aquéllos, con posterioridad a los sucesos del 6 de Septiembre de 1930.
- II.—Comunicaciones oficiales varias.

III.—Petición particular.

- IV.—Proyecto de ley del señor diputado Dickmann (A.) y otros, sobre intervención federal a la provincia de Buenos Aires.
- V.—Proyecto de ley del señor diputado Colombres sobre compra-venta de casas de comercio.
- VI.—Proyecto de ley del señor diputado Ruggieri sobre derogación de la ley 4.144, de residencia de extranjeros.
- VII.—Proyecto de ley del señor diputado Escobar sobre estatuto de los empleados públicos.

- VIII.—Proyecto de ley de los señores diputados Loyarte y González (B. S.) sobre asistencia social del niño.
- 4.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Rodríguez Pinto, Sellarés, Albarracín, Parera, Molina y Saggese.
- 5.—A indicación del señor diputado Pueyrredón, se inserta una nota de la Asociación Argentina del Sufragio Femenino.
- 6.—Homenaje a la memoria de M. Albert Thénas.
- 7.—Proyecto de resolución del señor diputado Buira solicitando informes al señor ministro de obras públicas sobre las razones que tiene la empresa del Ferrocarril Oeste para no dar cumplimiento a las obligaciones contraídas de acuerdo a la ley número 7.846, para llevar sus vías a bajo nivel desde la calle Rojas hasta la estación Liniers. Se aprueba.
- 8.—Proyecto de resolución del señor diputado Cortés Arteaga solicitando informes al Poder Ejecutivo sobre entradas y gastos de explotación, reservas de renovación autorizadas por la ley 5.315, cuenta «capital», número de empleados y sueldos y aumentos de sueldos de los ferrocarriles de jurisdicción nacional. Se aprueba.
- 9.—Asuntos entrados:

IX.—Mensaje del Poder Ejecutivo relacionado con el contrato de concesión de una red de elevadores de granos entre el Gobierno Provisional, la Asociación de Cooperativas Argentinas y la Corporación Americana de Fomento Rural.

X.—Telegrama de agradecimiento del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Francia.

- 10.—Proyecto de declaración del señor diputado Aráoz (B. M.) expresando que la Honorable Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo promoviera cuanto antes la celebración de un tratado de comercio con Chile a base de

la abolición del impuesto prohibitivo a la introducción de ganado argentino.

- 11.—Indicación del señor diputado Bermúdez, aprobada, a fin de que se amplíe el número de miembros de la comisión especial encargada de estudiar la situación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.
- 12.—Designación de comisiones.
- 13.—Concurre el señor ministro de obras públicas a contestar la interpelación sobre ampliación de obras y régimen de tarifas del puerto de Rosario.

—En Buenos Aires, a nueve de Mayo de 1932, siendo la hora 15 y 30:

1

ACTA

Sr. Presidente (Cafferata). — Queda abierta la sesión con asistencia de 87 señores diputados.

Se va a leer el acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Iribarne se suprime la lectura y se da por aprobada el acta.

2

HOMENAJE

Sr. Presidente (Cafferata). — Señores diputados:

El atentado contra el presidente de la nación francesa ha tenido un trágico desenlace y motivado la condolencia y la protesta de todo el mundo civilizado. El ilustre anciano, M. Paul Doumer que había dado a su patria con lo más caro, la sangre de sus hijos, sus energías, sus entusiasmos, su consagración constante, ha caído víctima de un insensato arrastrado al crimen por el extravío de sus ideas!

Como un acto de solidaridad internacional, para asociarnos al dolor de la gran nación amiga, como testimonio

severas palabras de Alberdi, cuando dice (tomo III, Obras completas, pág. 545): «Mientras haya hombres que hagan título de vanidad de llamarse hombres de revolución, en tanto que se conserve estúpidamente la creencia, que fué cierta en 1810, de que la sana política y la Revolución son cosas equivalentes, en tanto que haya publicistas que se precien de saber voltear ministros a cañonazos, mientras se crea sinceramente que un conspirador es menos despreciable que un ladrón, pierde la América española toda la esperanza de merecer el respeto del mundo.»

Sean mis palabras finales las del gran estadista argentino, Roque Sáenz Peña: «Hay que inspirar repulsión por el delito electoral. Estoy resuelto a no acordar ningún indulto a los delinquentes de esta estirpe.»

Nada más.

Adolfo Dickmann.

—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

V

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Decláranse elementos constitutivos de un establecimiento comercial e industrial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábricas, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística.

Art. 2º — Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, sólo podrán efectuarse válidamente previo anuncio durante diez días en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en uno o más diarios del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase de negocio, nombre y domicilio del vendedor y del com-

prador o del rematador, y en caso que interviniese, el del escribano con cuya actuación se realizará el acto.

Art. 3º — El enajenante entregará en todos los casos al presunto adquirente una nota firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilios de los acreedores, créditos por los que se podrá solicitar medidas preventivas de inmediato, a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación.

Art. 4º — El documento de transmisión recién podrá firmarse después de transcurridos cinco días desde la última publicación y hasta ese momento, los acreedores afectados por la transferencia, podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano que intervengan en el acto, reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito en cuenta especial en el Banco de la Nación, de las sumas necesarias para el pago.

Art. 5º — El comprador, rematador o escribano deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término de veinte días a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial.

Art. 6º — Transcurrido el plazo que señala el artículo 4º sin mediar oposición, o llenándose las formalidades del artículo anterior, si ella se hubiera producido, recién podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que, para producir efecto con relación a terceros, deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de diez días en el Registro Público de Comercio, o en un registro especial creado al efecto.

Art. 7º — No podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial o industrial por un precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el artículo 4º, salvo el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores.

Estos créditos deben proceder de mercaderías u otros efectos suministrados al negocio.

Art. 8º — A los efectos determinados en el artículo anterior se presumen simuladas *juris et de jure* las entregas que aparezcan efec-

tuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el comprador al vendedor y en tanto cuanto ellas puedan perjudicar a los acreedores.

Art. 9º — En los casos en que la enajenación se realice bajo la forma de ventas fraccionadas de las existencias, en remate público, el martillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en la forma establecida por el artículo 2º, ajustándose a las obligaciones señaladas en los artículos 4º y 5º en el caso de notificársele oposición.

Art. 10. — Las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley, harán responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano, por el importe de los créditos que resulten impagos, como consecuencia de sus omisiones y hasta el monto del precio de lo vendido.

Art. 11. — El Registro Público de Comercio o el especial que se organice, llevará los libros correspondientes para la inscripción de las transmisiones de establecimientos comerciales e industriales, cobrando a ese efecto los derechos que determinen las leyes de impuestos.

Art. 12. — Comuníquese, etc.

Carlos G. Colombres.

Señor presidente:

Desde hace más de veinte años vienen repitiéndose en ambas Cámaras del Congreso proyectos de ley, tendientes a legislar las transferencias de los fondos de comercio. Uno de ellos, el del señor senador Melo, llegó a ser sancionado por la Honorable Cámara de Senadores, sin convertirse en ley.

El desenvolvimiento alcanzado por el comercio en el país, hace cada día más necesaria la ley que reglamente las transferencias de los negocios, en salvaguardia de ese mismo comercio, que hoy se ve perjudicado por los actos fraudulentos que a diario se realizan en perjuicio de los acreedores, sin que a éstos les sea posible impedirlos por la falta de una legislación adecuada.

Estas transferencias necesitan una ley que las reglamente, ya que, por la modalidades que presentan, se diferencian substancialmente de la compraventa corriente. Los establecimientos comerciales o industriales, han dejado de ser la simple suma de mercaderías o ma-

quinarias, para convertirse en una entidad distinta, formada no sólo por los bienes materiales, sino también por otros inmateriales, como el nombre, clientela, patentes de inventos, etcétera, cuyo conjunto constituye una personalidad, con vida propia y distinta de la persona de su propietario, siendo esa entidad la que ha gozado de crédito y no es posible, que de un día para otro pueda desaparecer, pasando a poder de un tercero, sin que los afectados tengan el medio de salvaguardar su derecho. Se hace necesaria la disposición legal que regule la operación; a esa finalidad tiende este proyecto de ley.

Es de todos conocida la característica de nuestro comercio que opera principalmente con ventas a plazo; y es así que cuando al vencimiento de la obligación, se desea hacer efectivo el crédito, el deudor, propietario del negocio, lo ha transferido a un tercero, ante quien no queda ningún recurso legal. Estas transferencias son hoy día, en muchos casos, el fruto de una connivencia dolosa entre el comprador y vendedor, que proceden ocultando la realización de la operación hasta que ella ha quedado terminada y el enajenante se ha ausentado con el precio en efectivo, dejando burlados a los que habían depositado su confianza abriéndole un crédito.

Se ha desarrollado hoy día una verdadera industria, existiendo en las grandes ciudades toda una organización que se dedica a estas actividades, aprovechando la situación sin defensa en que se encuentra el comercio honesto, única víctima de estas maniobras.

He tomado como base de este proyecto las iniciativas anteriores y en especial el proyecto que en el año 1928 sancionó el Senado de la Nación, al cual se han introducido las modificaciones que en mi concepto darán mayor eficiencia a la ley.

He fijado en este proyecto la noción de lo que hoy día se conoce como fondo de comercio, con el objeto de evitar las dificultades y pleitos que se originan frecuentemente, entre comprador y vendedor, de un establecimiento comercial o industrial, por no haberse previsto debidamente en el contrato, el alcance exacto de la operación.

Se reglamenta luego el procedimiento a que deben ajustarse estas transacciones, obligando a dar la publicidad que necesariamente deben tener estas clases de ventas y fijando las nor-



mas, así como la forma, en que pueden ejercitar sus derechos los que podrían resultar perjudicados con esta enajenación. He tratado de dar la mayor simplicidad a las formalidades, por lo cual no he creído indispensable la exigencia de hacer la operación por escritura pública, ya que, con la inscripción en el Registro Público de Comercio se obtiene el mismo resultado.

Con este proyecto va a llenarse una verdadera laguna del Código de Comercio, que no ha podido prever en la época de su sanción la importancia y frecuencia que alcanzarían esta clase de transacciones comerciales. En Francia ha sido también necesario complementar el Código de Comercio con la ley del año 1909, modificada posteriormente en el año 1913, existiendo numerosas iniciativas posteriores con el objeto de perfeccionarla.

Esta ley es requerida hoy con urgencia, en resguardo del comercio y vendrá a resolver una de las muchas situaciones que no contemplan las leyes actuales, como consecuencia del atraso en que se encuentra la legislación de nuestro país, por la inercia del Congreso en los últimos años.

Vivimos con la legislación de fondo del siglo pasado, la cual habrá sido buena en aquella época, pero necesita ser renovada, o por lo menos completada con nuevas leyes, que resuelvan los problemas actuales, nacidos como consecuencia del progreso de la vida social moderna.

El derecho, como todos los hechos sociales, está siempre en un estado de perpetua transformación y por tanto las instituciones jurídicas deben hallarse siempre en evolución.

Nuestra legislación en todos los órdenes, no es la exacta y real expresión de nuestro derecho. Modernizarla y dotar a nuestro país de las instituciones que han de regular y resolver sus problemas económicos y sociales, es la labor que corresponde realizar al Congreso y que la República espera sabrá hacerlo, para encauzar y acelerar su marcha por las sendas del progreso.

Carlos G. Colombres.

—A la Comisión de Legislación General.

VI

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Derógase la ley N° 4.144 de residencia de extranjeros.

Art. 2º — Comuníquese, etc. .

Silvio L. Ruggieri.

I

Señor presidente:

La ley 7.029 — sancionada en un momento de extravío parlamentario, que sus autores denominaron falsamente de «defensa social» — incluyó en sus disposiciones la anterior de extrañamiento de extranjeros — la 4.144 —, primer capítulo legislativo del capitalismo argentino contra el movimiento de los trabajadores.

En efecto: el artículo 3º de la ley 4.144 autorizaba al Poder Ejecutivo para impedir la entrada al territorio de la República de todo extranjero condenado o perseguido por tribunales extranjeros o cuya conducta «pudiera» comprometer la seguridad nacional o perturbar el orden público; y el 1º de la ley 7.029 modificó y amplió aquella disposición.

Los artículos 1º y 2º de la ley de residencia 4.144 pusieron en manos del Poder Ejecutivo la facultad de expulsar sin juicio previo a los extranjeros que se hallaren en la situación ya mencionada, y el 4º de la ley 7.029 — absorbiendo explícitamente el contenido de la anterior — disponía que «el Poder Ejecutivo ordenará la inmediata salida del país de todo extranjero que logre entrar a la República con violación de esta ley o que se halle comprendido por la ley 4.144.»

La ley 7.029 agregó, en su artículo 33, que quedaban «derogadas las disposiciones vigentes que se opongan a la presente ley.»

Con poco esfuerzo se entiende que la ley 7.029, en cuanto se refiere a la materia contemplada en la 4.144, reemplazaba a ésta, íntegramente, modificando la legislación represiva de las reivindicaciones obreras.

Por tal causa, cuando el artículo 305 del nuevo Código Penal declaró derogada, entre otras, la ley 7.029, no pudo interpretarse otra cosa que incluía la derogación virtual, si no explícita, de la ley de residencia.